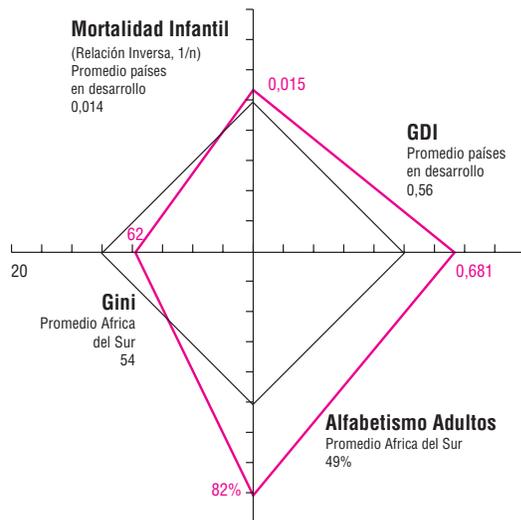


S U D Á F R I C A

I N F O R M E



El Diamante de la Equidad: valores nacionales en terracota comparados con los regionales en azul.

La distribución y apropiación de la tierra son una de las mayores fuentes de desigualdad en Sudáfrica, pero al menos ahora la capacidad de los campesinos y el aporte que hicieron son reconocidos por el Estado, lo que indica que sus vidas están a punto de cambiar para mejor.

El 76% de los 40 millones de personas que viven en Sudáfrica son negros. Aproximadamente 58% de los sudafricanos negros viven en los ex «Bantustans». Las mujeres comprenden 55% de la población adulta del país y el 69% de los habitantes de los «Bantustans» son mujeres. **Los arquitectos del apartheid utilizaron las políticas de la tierra como un instrumento de política económica, junto a una política de control del movimiento de los tra-**

LA TIERRA

abajadores agrícolas para suministrar mano de obra barata a los productores blancos.

RESTITUCIÓN Y EQUIDAD

La represión de las luchas por la tierra tomó la forma visible de los desalojos en los años 60, 70 y 80. Aunque el gobierno posterior al apartheid reconoció las injusticias y la opresión de anteriores expropiaciones de tierra, el proceso de reparación es tan lento que la gente está comenzando a perder la esperanza.

Requiere rellenar formularios y entregarlos al Comisionado de Reclamo de Tierras y las comunidades esperan años para que sus reclamos lleguen al. De los 16.670 casos de restitución que se presentaron ante la Comisión de Reclamos de Tierras, sólo 48 han llegado ante el Tribunal de Reclamos. Iglesias y dependencias del gobierno también mantienen tierras que pertenecieron en un principio a las comunidades. La Fuerza de Defensa Sudafricana es una de estas dependencias que cuenta con grandes extensiones de tierra en el país.

Este año, durante la revisión parlamentaria del sector de la defensa, el Ministro de Defensa Joe Modise sostuvo que «*equipos militares fuera de época y la magnitud del recorte del presupuesto habrán de trastornar a las funciones de defensa*». El Ministro expresaba su preocupación por un recorte de R 4.100 millones del presupuesto de defensa. Mientras el Ministro solicita más dinero para su departamento, varias comunidades están preocupadas por el lento proceso de la restitución, especialmente por la reticencia para entregar sus tierras que demuestra la Fuerza de Defensa Sudafricana (SANDF).

Se supone que el proceso de restitución del gobierno asegurará que las personas que fueron retiradas por la fuerza de su tierra la recuperarán o se les otorgará una reparación equivalente si la restitución no es factible. **La Fuerza de Defensa Sudafricana es culpable de aferrarse a la tierra confiscada de la gente durante la época del apartheid.** De las 217.038 hectáreas que la SANDF entregó desde 1986, sólo 86.862 fueron devueltos a sus dueños originales. Las restantes 130.176 hectáreas se devolvieron a otros departamentos del gobierno como los Departamentos de Conservación y Agricultura. En la actualidad, la SANDF cuenta con 488.879

hectáreas y 9 reclamos de restitución se presentaron en su contra. La SANDF afirma estar comprometida con la resolución de los reclamos sobre la tierra a través de un arreglo negociado y utilizando al Tribunal de Reclamos de Tierras como último recurso, pero las comunidades fallaron en sus intentos de obligar a negociar a la SANDF. La gente se enfrenta a la frustración y el acoso cuando luchan por recuperar sus tierras.

El ejército británico y otros países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral coincidieron recientemente en la escuela militar de Lohattha, en uno de los periódicos ejercicios de guerra de la SANDF denominado Operación Ola Oceánica. **No hay ningún océano cerca de la escuela de batalla.** La escuela militar, de 135.000 hectáreas, es una de las muchas bases del ejército que pertenecen a la SANDF. Incluso el ejército británico que participó del ejercicio elogió la abundancia de espacio que existía en Lohattha.

La tierra también es reclamada por tres comunidades, dos de las cuales (Gatlhose y Maremane) fueron retiradas por la fuerza durante la época del apartheid en 1978.

La tercera comunidad, la Khosis (clasificada como «de color» durante los años del apartheid) permaneció en el territorio. Durante los ejercicios militares, misiles perdidos matan cabezas de ganado con frecuencia y se supone que la gente debe permanecer encerrada en sus hogares durante una semana para evitar el peligro. Las comunidades Gatlhose y Maremane fueron retiradas de la tierra donde su ganado se criaba y fueron trasladadas a Kuruman, zona semidesértica en lo que entonces era la tierra natal de los Bophuthatswana. Más adelante, la SANDF alojó a algunos hacendados afrikaner en otras zonas con fines de pastoreo.

Los intentos de las comunidades por organizar protestas pacíficas siempre terminan por recibir la hostilidad y la confrontación de los militares, que trasladan a los manifestantes a estaciones policiales en camiones militares y los someten a largos procesos de interrogación. Niños y mujeres no son excluidos del acoso.

En un intento por mediar en el conflicto entre el ejército y las comunidades, el presidente Nelson Mandela realizó recomendaciones sobre la forma de resolver la disputa. Entre las mismas, declaró que la SANDF debe reconocer que las comunidades son las legítimas propietarias de la tierra y los militares deben acceder a arrendarla. Mandela también sugirió que el Estado adquiera, para uso de las comunidades, una parte adyacente de la tierra que los hacendados utilizan en la actualidad para pastoreo.

Aunque las comunidades están dispuestas a negociar algunas de las recomendaciones del Presidente, la SANDF aún no se mostró dispuesta a discutir las propuestas. Hasta el momento, la SANDF afirmó a los medios de comunicación que las comunidades recibieron 5 millones de «rands»¹ como compensación, algo que las comunidades niegan haber recibido. Las mismas designaron a un comité de orientación, integrado por cinco miembros, para intentar la negociación, pero el único resultado fue que sus integrantes tuvieron que trasladarse por todo el país en reuniones infructuosas con la SANDF. No se realizó ningún avance.

«Estamos cansados de viajar sin resultados positivos, cuan-

do la gente nos dio la autoridad para asistir a las reuniones, esperaban que volviéramos con algo tangible», se quejó Boniface Mosiane, uno de los representantes de la comunidad. En lugar de tomar medidas para devolver la tierra a la gente, la SANDF anunció que modernizará las instalaciones de Lohattha.

Las opiniones del gobierno provincial de Cabo del Norte implican un obstáculo a los reclamos sobre la tierra. El Ministro de Agricultura, Conservación Natural y Reforma Agraria de la provincia de Cabo del Norte, Thabo Makweya, asegura que la base militar será un importante beneficio para la provincia, las comunidades y el país en general. *«El Cabo del Norte se esforzará para que la base sea un beneficio para la comunidad y que ayude a la provincia a ocupar su lugar en el mapa»,* sostuvo.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por las comunidades, que también cuestionan el compromiso del gobierno con la reforma agraria y el hecho de que se permita a la SANDF seguir adelante con los ejercicios militares. La ley de restitución establece en forma clara que nada impedirá o retrasará el proceso de restitución. *«Pensamos que el gobierno por el que votamos reconocerá y resolverá los errores que se cometieron en los años del apartheid, pero el Ministro ni siquiera tiene la cortesía de reunirse con nosotros para resolver el problema»,* señaló Josiah Gasehete, uno de los representantes de la comunidad.

DESALOJOS, CONFISCACIÓN Y PROPIEDAD DE LA TIERRA

Otro aspecto de la lucha de las comunidades por recuperar sus tierras refiere a la terrible situación de inseguridad de los trabajadores agrícolas. El sufrimiento de la población agrícola en Sudáfrica contradice a la nueva constitución y se burla de ella. El derecho a un hogar seguro y el acceso a las instalaciones sanitarias sigue sin aplicarse en el caso de los pobres rurales. La educación no parece ser un derecho sino un privilegio para los hijos de los trabajadores agrícolas ya que su futuro está en manos de los hacendados. Organizaciones preocupadas por los desalojos, el acoso y la confiscación de pertenencias y ganado se enfrentaron al problema y expusieron la verdadera situación de las haciendas.

Las leyes que limitan los movimientos de los trabajadores agrícolas datan de 1856, cuando se aprobó la Ley de Amos del Cabo. La ley estipuló la inscripción obligatoria de los sirvientes agrícolas. La Ley de Tierras Nativas, de 1913, marcó el comienzo de una serie de leyes que anularon la independencia de los arrendatarios de tierras. Esta Ley de Tierras Nativas eliminó la aparcería independiente y el arrendamiento en zonas de propietarios blancos. Es comparable a la Ley de 1951 en Prevención de Ocupaciones Ilegales, que facultaba al Ministro a retirar a personas negras de tierras de propiedad pública o privada.

Estas leyes severas que se adoptaron entre 1856 y 1979 son la causa de las ocupaciones ilegales, los «bantustanes» y la distribución desigual de la tierra. Los campesinos cargaban con el peso de las normas discriminatorias.

¹ Rand: unidad monetaria Sudáfrica.

Luego se produjo la liberación del actual presidente Sudafricano Nelson Mandela y el proceso de democratización del país. Los partidos políticos comenzaron a realizar campaña para las elecciones de 1994: algunos se acercaron a los campesinos y solicitaron sus votos. La mayoría de los trabajadores rurales miraron a la democracia desde el borde del camino, pero como se les crearon grandes expectativas y esperanzas creyeron firmemente que no pasaría mucho tiempo antes de que volvieran a sus hogares. Cuatro años después, la cantidad de personas que son retiradas por la fuerza de sus hogares aumenta a diario. La ocupación ilegal y la exposición a un ambiente insano es la realidad para las familias desalojadas.

A fines de 1996, el Comité Nacional de Tierras lanzó una campaña contra el desalojo de los campesinos dirigida a exponer la falta de interés de los propietarios blancos en reconocer anteriores injusticias. La medida presionó al gobierno para que realizara un proceso de consultas para enfrentar la crisis de los desalojos. **En un intento por conformar a todos las partes en conflicto, el gobierno invitó a las organizaciones a que presentaran sugerencias sobre la mejor manera de combatir los desalojos y asegurar que los trabajadores rurales puedan recibir un tratamiento justo, como cualquier otro Sudafricano que merece que se le reconozcan sus derechos.**

La primera versión de la ley se publicó el 4 de febrero de 1997.

Las asociaciones de hacendados y campesinos y el Comité Nacional de Tierra presentaron sus recomendaciones y luego se redactó el Proyecto de Ley de Extensión de Seguridad de Tenencia de la Tierra. La intensa campaña de las organizaciones de hacendados hizo que la ley se cambiara en forma drástica. Los artículos positivos que parecían reconocer el sufrimiento que soportaron los campesinos fueron eliminados, y otros, que justificaron el desalojo por parte de los hacendados permanecieron en su lugar. Los hacendados elogiaban la ley hasta que, el 28 de agosto, el parlamento la aprobó con nuevos cambios, esta vez, a favor de los campesinos. La nueva ley establece que todos los mayores de 60 años que hayan residido en una hacienda por más de 10 años están eximidos del desalojo y poseen derechos de uso.

Un artículo que acepta la finalización del empleo como razón válida para desalojar a la gente de sus hogares fue eliminado y sólo las personas que violan el acuerdo con los propietarios o constituyen una amenaza para otros residentes pueden ser desalojados. No obstante, antes del desalojo se debe presentar evidencia de dicha violación o amenaza. Antes de la última modificación de la ley, los hacendados utilizaron el artículo sobre la finalización del empleo para su beneficio al «renovar» los contratos de sus empleados permanentes (el proyecto de ley establece que las personas que permanecen más de 20 años en una hacienda no deben ser desalojados). Luego de desalojar a las personas que tienen posibilidades de recibir protección del proyecto de ley, los hacendados los emplean nuevamente en contratos de corto plazo como trabajadores temporales.

El extendido analfabetismo en las haciendas empeoró la situación ya que los campesinos no pueden oponerse a las órdenes de desalojo ni comprender de qué se les acusa. El sistema de justicia de Sudafrica, no hace mucho para garantizar que los hacendados que solicitan una orden de desalojo tengan razones válidas para hacerlo. Los propietarios consiguen órdenes de desalojo con faci-

lidad, sin enfrentar oposición, debido con frecuencia a que las cortes locales están vinculadas con los propietarios de tierras mediante lazos sociales y políticos. La policía, favorable a los hacendados, es utilizada con frecuencia para acelerar el proceso de desalojo. Ahora que la Ley fue modificada, la corte debe estar convencida de que el campesino rompió el compromiso que tenía con el propietario de la tierra para ser desalojado.

Una investigación realizada por el Centro de Tierra Agrícola (LAPC) reveló que las mujeres contribuyen con cerca de 80% del trabajo agrícola, principalmente como mano de obra familiar no remunerada. Las viudas y sus hijos son los más vulnerables en las haciendas de Sudafrica. Los hacendados con frecuencia firman contratos con los campesinos y cuando éste muere la familia queda en la calle, sin importar por cuánto tiempo vivió en la hacienda, estableció su hogar y entregó sus servicios al hacendado. La ley ahora protege a todos los dependientes y la notificación de desalojo debe entregarse al menos 12 meses antes de la fecha de éste y sólo cuando existe una vivienda alternativa. Ha sido establecido que la nueva vivienda debe adaptarse al estilo de vida del campesino, es decir que no debe ser menos favorable que la anterior. Ello incluye el acceso a la tierra para uso agrícola y los servicios que tenía a su disposición antes del desalojo.

Solomon Mokoena, de 78 años, nació en la hacienda de Deemster, en la provincia del Estado Libre, y debe conseguir un nuevo lugar para vivir. «Soy sólo piel y huesos y sin embargo se supone que debo buscarme una vivienda nueva», se lamentó Mokoena durante una convención de campesinos que se realizó en Bloemfontein para advertir a los trabajadores de las haciendas sobre sus derechos y cómo los afecta el Proyecto de Ley. Arrastrando sus pasos por los corredores, habló de sus esperanzas de que un nuevo proyecto de ley propuesto por el gobierno les permita regresar a sus hogares.

Existen 250 hogares (aproximadamente 1.800 personas) en el Estado Libre que, como el Sr. Mokoena, fueron desalojados desde julio de 1996, otros seguirán el mismo camino a medida que las órdenes de desalojo se expidan en forma regular. En la provincia del Noroeste, 70 personas fueron desalojadas desde febrero y 25 hogares fueron desalojados en Mpumalanga en julio. Ello es sólo la punta del iceberg a medida que se revela la situación por el control de ONG y organizaciones de campesinos que operan en las zonas.

La situación es incluso peor porque los hacendados no permiten a los campesinos asistir a las convenciones rurales «Los propietarios dicen que si corrompemos a sus empleados, no deberíamos llevarlos nuevamente a sus haciendas», sostuvo Phumeza Grootboom, del Comité de la Frontera Rural (BRC), una de las organizaciones que trabaja junto a la Organización de Servicios de la Tierra de Traskei (TRALSO) para organizar a los campesinos y asegurarse de que los mismos realicen sus propios aportes al proyecto de ley. Es por eso que los integrantes de las organizaciones esgrimen una razón diferente para solicitar a los hacendados la realización de talleres con los campesinos.

Los propietarios han intentado tomar como rehén al gobierno con el argumento de que la agricultura es un motor económico importante del país y que el Estado debe tener cuidado para no llevar al sector a la crisis, han fracasado. El argumento sólo subraya la importancia que tiene el asegurarse de que los campesinos



cumplan un papel importante en Sudáfrica. «*La única manera que tengo de ganarme la vida es a través de la agricultura, no se me ocurre otra cosa*», dijo John Mokgethea, quien recibió un orden de desalojo por exigir una pensión de subsistencia. Su orden de desalojo, que recibió junto con otras 63 familias, habrá de cumplirse pronto y luego de trabajar en una hacienda por 40 años, tendrá que buscarse un hogar nuevo y otros medios de supervivencia. Ahora el proyecto de ley establece que quienes vivieron en una hacienda por más de 10 años y las personas mayores de 60 años estarán excluidas de los desalojos y tienen derecho de usufructuar la tierra.

Hizo falta mucho trabajo y dedicación para que los campesinos sean considerados como el puntal de la economía Sudáfrica de hoy. Requiere un gran apoyo financiero y enormes subsidios para asegurar el éxito.

Mientras organizaciones como el Comité Nacional de Tierras se preparan para empoderar a los campesinos con la realización de talleres y asegurarse que sepan sus derechos, la Asociación de Hacendados de Sudáfrica no se impresiona con el resultado. Con la excepción del Congreso Panafricano y el ANC, todos los partidos políticos que integraron el comité sobre el tema, incluyendo al Partido Inkatha de Libertad, el Partido Conservador y el Partido Nacional, se opusieron al proyecto de ley. Mientras, aunque los hacendados y los partidos políticos que los respaldan rechazan el cambio que afectará al actual desequilibrio de poder en el país, los campesinos podrán utilizar el proyecto de ley para su beneficio.

- National Land Committee (Comité Nacional de Tierras)